

de nuevos elementos, lo que no existe, lo que da lugar a explicar las nuevas improntas, los artefactos culturales que dan significado a nuestros escenarios de vida; por ser ecólogos de las relaciones y vínculos que explican los frágiles

equilibrios de vida en las escuelas y organizaciones sociales y, ante todo, por ser geógrafos e historiadores de nuestra propia narrativa explicativa de los tópicos sobre los cuales gravitan nuestro cuerpo, mente y cultura.

Carlos Rodríguez Wallenius, *Geopolítica del desarrollo local. Campesinos, empresas y gobiernos en la disputa por territorios y bienes naturales en el México rural*, México, UAM/Ítaca, 2016.

MILTON GABRIEL HERNÁNDEZ GARCÍA*
ALEJANDRA OLVERA CARBAJAL*

Este libro puede ubicarse en un universo de publicaciones muy recientes que, dentro de un conjunto de diferentes miradas y enfoques teóricos, nos muestra una radiografía desgarradora de la barbarie contemporánea del capitalismo y sus demonios. Me refiero a las obras de Víctor Manuel Toledo, *Ecocidio en México: la batalla final es por la vida*;¹ de Mina Lorena Navarro, *Luchas por lo común. Antagonismo social contra el despojo capitalista de los bienes naturales en México*,² y

de Armando Bartra, *Se hace terruño al andar. Las luchas en defensa del territorio*,³ y a nivel latinoamericano, el publicado en abril de este año, *Despojos y resistencias en América Latina/Abya Yala*, coordinado por Carlos Walter Porto-Goncalves y Daniel Hocsman.⁴

Esta obra constituye un amplio análisis sobre los múltiples procesos de despojo de los bienes comunes que tienen lugar a nivel nacional, pero también de las acciones de resistencia. Como señala el autor, en el siglo XXI se intensificaron los procesos de pillaje en América Latina emprendidos por corporaciones globales y empresas nacionales en alianza con los gobiernos nacionales y locales. Estos procesos que agudizaron el saqueo y la creciente respuesta organizada de los pueblos, han llevado a que Carlos Rodríguez analice las nociones de territorio y territorialidad. Las primeras, ligadas a los procesos históricos, culturales y simbólicos que se han construido

* Escuela Nacional de Antropología e Historia, INAH.

¹ Publicado en México en 2015 por Grijalbo.

² Publicado en México en 2015 por Bajo Tierra Ediciones y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

³ Publicado en México en 2016 por Ítaca Ediciones y la Universidad Autónoma Metropolitana.

⁴ Publicado en Buenos Aires en 2016 por Estudios Sociológicos Editora.

a lo largo del tiempo por los habitantes de un sitio; las segundas, una forma de imposición de significados y aprovechamientos realizados por ajenos.

Para acercarnos a los complejos procesos que se están llevando a cabo en los diferentes territorios, el autor ha echado mano de elementos teóricos de la geografía crítica y de la sociología política, configurando un enfoque desde la geopolítica del desarrollo local, a partir del cual se pueden analizar las formas en que los actores locales pueden impulsar una direccionalidad y construir futuros a pesar de las grandes desigualdades.

En el primer capítulo se argumenta que la llegada al siglo XXI ha estado marcada por una amplia gama de movimientos locales y regionales centrados en la defensa comunitaria del territorio. Nos recuerda que, en los últimos 10 años, se han documentado al menos 60 casos de conflictos socioterritoriales en el capítulo “México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA)”. Al respecto, cabe mencionar que el conteo que hace Víctor Manuel Toledo es más escalofriante, pues identifica 450 conflictos socioambientales hasta febrero de este año.⁵

En estos procesos de lucha se hicieron evidentes visiones contrapuestas, así como diferentes formas de concebir un mismo territorio, que se nos muestran como una categoría que va más allá de su dimensión geográfica, hace que su comprensión dependa del análisis de los procesos sociales que se generan en su torno.

El autor señala algunos elementos del sistema económico capitalista que resultan relevantes para entender la causalidad de la lógica del propio capital, que lo impulsa sobre territorios campesinos e indígenas como una forma contemporánea de acumulación. De esta manera, el neoextractivismo se nos presenta como una forma agresiva y renovada de despojo, pero el autor prefiere hablar de “territorialidad extractivista” como un proceso de despojo y destrucción del territorio. Al hacer un análisis de las dinámicas del capital en un espacio dado y de su expresión en las disputas territoriales, se configuran campos de conflicto caracterizados por la apropiación de bienes naturales, por el control y dominio de infraestructura y medios de reproducción.

En el libro, el autor identifica cinco modelos de despojo a través de los cuales se entroniza el capital en los territorios:

1) El modelo de crecimiento urbano, que se fundamenta en la moderna dicotomía capitalista que distingue lo rural y lo urbano. En el siglo XIX lo urbano se consolidó como la tendencia dominante del poder y de la acumulación, del prestigio social, de la civilización frente a lo arcaico. Señala el autor que “en esta fase capitalista neoliberal globalizada, la confrontación entre el modelo de crecimiento urbano y las formas de producción y organización campesina e indígena se acentuó” (p. 60).

Hoy por hoy se incentiva el crecimiento de las ciudades, que centralizan y concentran servicios, productos, mercados y fuerza laboral, “transformándose en nodos de la globalización”. La desvalorización de la forma de vida campesi-

⁵ *La Jornada*, 10 de febrero de 2016.

na frente al modelo urbano es uno de los componentes que nos permiten entender el engranaje del despojo urbanícola.

La tendencia expansionista de la urbanización hacia las zonas conurbadas avanza gracias al precio diferencial de la tierra rural frente a la urbana. Precios bajos y campesinos presionados por las condiciones económicas y políticas se ven de repente en la posibilidad de malbaratar sus tierras a las grandes inmobiliarias que imponen un modelo de hábitat masificado que moldea una forma específica de vida.

Un campo de conflicto que identifica el autor en este modelo es la disputa por recursos estratégicos entre la urbe y el campo, principalmente el agua potable. En múltiples zonas del país podemos observar conflictos derivados del despojo, legal o ilegal, del líquido vital, a las comunidades campesinas para abastecer los enclaves residenciales en zonas periféricas de las grandes metrópolis. Ixtapaluca, Chalco, Tecamac son casos emblemáticos de este modelo de despojo en la zona centro del país, pero lo mismo podemos observar en Tuxtla Gutiérrez, Querétaro o Nuevo León.

2) El segundo modelo analizado es el extractivismo minero. Carlos Rodríguez nos recuerda que esta actividad no es reciente en nuestro país. Diversas ciudades coloniales surgieron y crecieron en torno a la explotación subterránea, artesanal, labor que ha sido parte sustancial de la configuración de la nación mexicana. Las modificaciones neoliberales a las leyes agraria y minera de la década de 1990, han allanado el camino para que el desarrollo de este modelo se imponga a un ritmo acelerado en varias

latitudes del país. El aumento en el precio de los metales, especialmente oro y plata en la primera década del siglo XXI, ha potenciado el acelerado y violento auge de esta industria extractiva.

La extracción de oro es tan rentable que los altos costos de operación son soportables incluso en yacimientos donde se pueden encontrar apenas 0.3 gramos por tonelada. Rodríguez nos explica el auge de las empresas transnacionales mineras y su expansión en países en los que las políticas fiscales y los marcos legislativos facilitan su operación; pero, además, nos muestra la manera cómo operan, la fuerza de infantería constituida por pequeñas empresas que utilizan para abrirse camino en el entramado político, social y jurídico que han de transitar para posicionarse en un territorio.

Estas empresas, dice Rodríguez, se encargan de explorar, realizar prospecciones y conseguir concesiones, corromper autoridades y coaccionar a campesinos para obtener permisos de extracción. De los 1 160 proyectos que reporta el autor en el país, 870 son de empresas extranjeras, y explotan sobre todo oro, cobre, plata, plomo y manganeso. La mayor parte de estos proyectos, en la actualidad, se encuentran en fase de exploración; es decir, se encuentran en el conflictivo proceso que implica negociar con los dueños del suelo y subsuelo, gestionar los permisos y monitorear la calidad y volumen potencial de los yacimientos.

El autor argumenta que hacia fines del 2014 se habían expedido 44 623 concesiones de exploración y explotación, que se traducen en 36 millones de hectáreas, superficie que representa 20% del territorio nacional. Al respecto, en

la obra de Rodríguez se encuentra una exhaustiva y detallada descripción de las empresas a las que se han adjudicado proyectos mineros, así como los mecanismos que utilizan para penetrar en localidades de campesinos, pero también una interesante tipología de las disputas que se desataron por esta actividad económica: desde la resistencia de los lugareños que confrontan directamente a las empresas para expulsarlas de la zona de explotación, una vez que se han instalado; las acciones que se organizan para anticiparse a los intentos empresariales por extraer minerales del subsuelo, hasta los grupos que no luchan por detener la minería, pero tratan de negociar una mejor redistribución de las utilidades así como los costos ambientales del extractivismo. Al respecto, se citan casos como los de San José del Progreso y Calpulalpan de Méndez en Oaxaca; Chicomuselo y Mototzintla en Chiapas; la Costa-Montaña, Mezcala y Cocula en Guerrero; Tlamanca, Ixtacamaxitlán y Tlatlahuicuitepec en la Sierra Norte de Puebla, entre otros.

Casi al finalizar el capítulo, el autor analiza de manera más detallada los casos de Mezcala y Tlamanca, que por diversas razones son paradigmáticos en la geopolítica del extractivismo minero, ya que la empresa canadiense Gold Corp., en el primer caso, logró imponerse y la comunidad se ha movilizó para obtener un pago mayor por la renta de las tierras. Cabe señalar que los impactos ambientales y en la salud que ha generado esta empresa son terribles a 11 años de operación. En cuanto a Tlamanca, el segundo caso, estamos frente a un proceso “exitoso” hasta el momento,

debido a que por una movilización efectiva se logró detener la operación del proyecto minero de la empresa china JDC Minerales.

3) El desarrollo turístico de enclave es uno más de los modelos que se han impuesto en nuestro país en las últimas décadas. Inmobiliarias, constructoras, cadenas hoteleras, desarrolladoras residenciales, clubes deportivos, restaurantes, marinas náuticas, balnearios y otros, están transformando la belleza escénica del paisaje en zonas costeras, que podemos observar en múltiples zonas rurales. Este tipo de terreno está aparejado a un modelo de desarrollo turístico basado, como señala Rodríguez, en el consumo de masas, sobre todo en lugares de alto impacto paisajístico. Estos desarrollos han significado, también, una nueva modalidad de despojo para las comunidades campesinas, considerando, sobre todo que México tiene más de 11 000 kilómetros de litoral, así como un importante número de comunidades costeras y de pescadores ribereños.

El autor analiza la disputa que tiene lugar por el dominio de las playas en Baja California Sur, tanto en Loreto, Los Cabos y La Paz, así como en Parque Nacional Cabo Pulmo; y la Isla de Holbox, Quintana Roo, que forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna Yulum Balam, donde ahora se construye un desarrollo que amenaza con despojar de sus posesiones a los ejidatarios. Este tipo de proyectos en las zonas costeras afectan no sólo a los pobladores locales en sus actividades productivas, sino que privatiza tierras y aguas costeras, accesos de playa y para la pesca, y destruye humedales, manglares y arrecifes.

En la defensa de estos espacios costeros ha sido esencial la alianza entre pescadores, campesinos, académicos y organizaciones ambientalistas, que se han enfrentado a proyectos de gran dimensión, como el Centro Integralmente Planeado (CIP) de Marismas Nacionales en Nayarit y Sinaloa. Además de la resistencia política y jurídica, señala el autor: “La territorialidad campesina y pesquera también se reconstituye con la diversificación productiva que han impulsado los pobladores de la costa, en la medida de que pueden combinar la agricultura y la pesca con otras actividades como el ecoturismo o la conservación de áreas naturales” (p. 171).

4) Un modelo más que se analiza es el de los sistemas de plantaciones forestales y de agrocombustibles. A decir de Rodríguez, este modelo expresa una profunda contradicción, una dicotomía tal vez insalvable entre una agricultura comercial, vinculada a intereses económicos que, con fuertes apoyos gubernamentales, buscan jugosas ganancias, aprovechando extensiva e intensivamente el suelo y el agua, cuya base son los monocultivos sostenidos con fuertes insumos agroquímicos y una agricultura campesina indígena, cuya base fundamental es la milpa y el maíz criollo, caracterizada por un policultivo y un aprovechamiento diversificado de los diferentes pisos ecológicos, sustentados en formas comunitarias de organización social.

Estos sistemas de producción están orientados a producir madera, celulosa y, desde hace poco, agrocombustibles. Señala Rodríguez: “[...] en los últimos años se ha intensificado una tendencia del capitalismo neoliberal que subordina

la producción agropecuaria y forestal mediante modalidades que incluyen la compra o renta de grandes extensiones de tierra y la siembra de monocultivos, aprovechando las condiciones de fertilidad de suelo y las facilidades para la inversión, para generar productos destinados a las necesidades del mercado globalizado” (p. 175).

Así, en México se consolida la industria de plantaciones comerciales como la del eucalipto, la teca, el cedro americano, la melina, y la palma africana, cuya madera se aprovecha para producir papel, muebles, autos, artículos deportivos, instrumentos musicales, prótesis, cosméticos y agrodiésel. Estas especies se privilegian por su rápido crecimiento, ya que el desarrollo de otras familias para su uso comercial suele ser de largo plazo.

Además de la palma africana, un importante cultivo agrocomercial es la *jatropha* o piñón mexicano, que se promueve entre los campesinos y pequeños productores mediante diversos incentivos y programas de apoyo. Un puñado de empresas controlan las semillas y extraen el aceite de la palma africana que venden a grupos empresariales, que a su vez utilizan su extracto para producir mantecas vegetales, grasas para lácteos, aceites para frituras, bases para helados, grasas para jabones y maquillajes e insumos para agrodiésel.

Organizaciones como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), además de campesinos de Veracruz, Tabasco y Campeche, han reivindicado su derecho a defender sus cultivos tradicionales frente a la imposición empresarial de las corporaciones.

A decir del autor, las contradicciones, que son inherentes al sistema de plantaciones, van desde el desdén de ejidatarios y campesinos a sembrar o rentar sus tierras, hasta la movilización para exigir el retiro de las corporaciones. Podemos decir que este modelo de despojo es un proceso en ciernes, que presenta una potencialidad, aún no desarrollada totalmente, debido a las grandes extensiones de cultivo que requiere.

5) El quinto modelo de despojo que se analiza es el de “megaproyectos de obras para infraestructura”. Esta forma se ha expandido de modo impresionante en los últimos 15 años, apoyada en una fuerte inversión nacional y extranjera e impulsada en diferentes niveles de gobierno. Carreteras, autopistas, presas hidroeléctricas y represas, aeropuertos, puertos marítimos, termoeléctricas, petroquímicas, parques eólicos, complejos comerciales, reordenamientos urbanos, ciudades rurales, entre otros, son los principales proyectos que consolidan este modelo de despojo antirural.

Este tipo de emprendimientos, una vez que se consolidan, provocan una afectación socioambiental sin precedentes en las comunidades rurales, ya que rompe la organización socioespacial comunitaria e incluso desplaza a los grupos de las localidades que las ocuparon a lo largo de la historia. El autor propone una interesante caracterización de los impactos que generan este tipo de megaproyectos: despojo y expropiación de la tierra, desplazamiento de la población afectada por el expolio, destrucción del ambiente y el hábitat, desarticulación de la economía local y violación a los derechos sociales y colectivos de las co-

munidades. Se recapitula los proyectos emblemáticos que han sido enfrentados por la oposición campesina e indígena, entre ellos el Club de Golf en Tepoztlán en la década de 1990, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la presa el Zapotillo en Jalisco, la presa Paso de la Reyna en Oaxaca, el parque eólico en San Dionisio del Mar y el Proyecto Integral Morelos que contempla la construcción de termoeléctricas, gasoductos y acueductos, que afectarán a 82 pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala. El autor se detiene para detallar los casos de La Parota en Guerrero y las Ciudades Rurales en Chiapas. Sobre este modelo de despojo, hace la siguiente reflexión:

Los megaproyectos de obras de infraestructura fungen como atalayas del capital en su proceso de apropiación territorial sobre los espacios de vida campesina, son una expresión de la territorialidad de las relaciones económicas dominantes, muestran las formas cómo la modernización del proyecto neoliberal permite eficientar los procesos de comercialización y distribución de mercancías, extracción de recursos y materias primas, la transmisión de energía eléctrica, la apertura de nuevos sectores de consumo y la movilidad de la fuerza de trabajo, es decir, refuncionalizan los territorios y les dan una direccionalidad conforme a los intereses y necesidades del capital (pp. 224-225).

El conflicto que se deriva de la disputa por el territorio entre diferentes territorialidades, tiene una fuerte correlación con el modelo de desarrollo dominante y las resistencias que éste genera. Entendida la disputa territorial en el

marco de las relaciones de poder, el autor recurre primero a Foucault para recordarnos que donde existen estas relaciones de poder, también existen prácticas diversificadas de resistencia, y después a Raffestin, que señala que un territorio es la manifestación espacial de estas relaciones de poder.

La resistencia es entendida acá como una forma de entender el proceso de construcción de una territorialidad específica. Pero la resistencia, según nos deja ver Rodríguez en su análisis, no sólo es por un territorio específico, por una superficie terrestre, por un recurso escaso, sino por un modo de vida y por la vida misma. La posibilidad de reproducción de la vida comunitaria, humana y no humana se encuentra en el centro de la resistencia: defender la vida desde la vida misma, frente al capital que se traduce en la muerte entrópica de todo lo que toca y transustancializa.

No sólo el buen vivir se convierte en aquello que se enfrenta al modelo de desarrollo dominante, sino lo hace la simplicidad y complejidad del vivir en sí, que se encuentra amenazado en estos tiempos por demás oscuros. El autor señala que nos encontramos en una fase compleja y emergente del movimiento campesino indígena, centrada en la defensa comunitaria del territorio, con fuertes conexiones con lo que pasa en diversas partes del mundo, sobre todo en América Latina, donde no pocos pueblos y comunidades enfrentan procesos de despojo y neoextractivismo.

El énfasis en la geopolítica del desarrollo local que se despliega en este libro permite, a nuestro juicio, visualizar no sólo los intentos del capital por impo-

nerse, también los procesos de resistencia de las comunidades. No se trata de un “no” a lo que desde arriba nos dicen que es el desarrollo y el progreso, sino de un “no” que, al mismo tiempo, afirma en la práctica un modo de vida campesino que se funda en lo comunitario, aunque muchas veces esta modalidad se encuentra hecha jirones por la migración o por la ruptura del tejido social que provocan las empresas.

En las conclusiones, el autor señala que: “El panorama del despojo rural es un proceso constante que se expresa en una diversidad de formas de expropiación y de intensidades variables”. Pero existen otras formas de saqueo que el autor deja abiertas para futuros análisis, como la mercantilización de la vida vinculada a la biopiratería, la privatización del espectro radioeléctrico, la explotación de hidrocarburos, o la trata de personas, el secuestro, la violencia homicida del narcotráfico que secuestra de formas diferentes a buena parte de la población.

Advierte de la necesidad de reconocer que estos modelos responden a una misma lógica de acumulación de capital, aunque se muestren por separado. En el contexto de una tasa media de ganancia decreciente que caracteriza al capital productivo industrial, el extractivismo abre para el capital la posibilidad de obtener ganancias extraordinarias. Sin embargo, considera Rodríguez que es necesario precisar que el despojo en sí es un mecanismo de acumulación, pero no la esencia, pues se requieren condiciones mínimas de utilidad y renta de estos recursos insertados en el mercado capitalista. Todo esto no sería posible sin el Estado mexicano como aliado:

marcos legales propicios, impuestos y derechos reducidos, laxas legislaciones ambientales, costos laborales mínimos, subsidios, corrupción, etc. Modificaciones *ad oc* a las leyes minera, agraria, de aguas nacionales, forestales, turísticas de inversión extranjera; un generoso sistema de concesiones de aguas y minerales; y programas oficiales para apoyar el despojo e incluso incentivos a la inversión con recursos públicos. El gobierno o los gobiernos colaboran también con la gestión del conflicto social, utilizando desde la cooptación hasta la represión, así como programas de manera clientelar. Efectúan además licitaciones, contratos y concesiones a empresas privadas. Carlos Rodríguez describe todo ello para mostrar que se libra una lucha desigual, pues las condiciones políticas, económicas y jurídicas favorecen la territorialidad extractivista.

El escenario que prefigura a futuro es un aumento en la presión sobre los bienes comunes naturales. Eso nos permite visualizar que la resistencia comunitaria en defensa del territorio es una

etapa emergente en el movimiento campesino indígena, pero también augura una lucha a largo plazo. Por otro lado, enfatiza el hecho de que hay disputas dispersas, pero también articulaciones regionales y nacionales como el Consejo Tiyat Tlalli en Defensa del Territorio, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la Red Mexicana de Afectados por la Minería y, llama la atención, la emergente Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio.

Consideramos que este libro es en sumo grado provocador, pues hace evidente no sólo la percepción sino la sensación, el sentimiento de que estamos en un momento decisivo, fundamental en la historia, y que debemos tomar postura y, por tanto, no se vale asumir políticas neutrales cuando todo se lo está llevando *el carajo* del despojo. Lo que está en juego no es una ideología política o una visión ingenua de la naturaleza o la madre tierra. Está en juego la vida, la reproducción de la vida humana y no humana, y sólo por eso vale la pena sumarse a esta batalla a que nos invita el autor.